3226218468 - WWW.SENOTA.COM.CO

¡Se nota!®

INFORME ESPECIAL - NOVIEMBRE 14/ 2026 - EDICIÓN 183 - RODRIGO VICTORIA BOTERO - ISSN - 2462-9723

10 Años | Desde 2015

PERIODISMO

OFICIO DE MAYOR RIESGO

Si alguien en Colombia ha estado 'firme por la patria' es el periodista. Aquel que denuncia, acompaña a la comunidad y va hasta sus entrañas para conocer sus triunfos y dolores. El que se codea con los poderes del Estado, los económicos, los hegemónicos y aquellos que buscan imponer su propia ley, pero sin ser parte de ellos: se mantiene en la distancia de la independencia, vigilante, para no permitir que la defensa de los derechos humanos y de los ciudadanos se la lleve el río de la corrupción, el poder amañado, la fuerza desmedida de las autoridades o la sombra con la que a veces encubren los entes de control.



FOTOS:ILUSTARCIÓN CON APOYO DE IA GEMINI

Son 171 colegas sacrificados en la era de la república en Colombia. Un centenar han sido forzados al exilio y entre los dos configuran la tragedia de la dedicación a un oficio desprotegido, hasta de su seguridad social, que camina en medio de las alianzas criminales del narcotráfico, el paramilitarismo, las guerrillas y los abusos de quienes aspiran y representan al Estado y dominan la economía, actores ejerciendo violencia, censura, perfilamiento y espionaje legal e ilegal.

El asedio está mutando, con ayuda tecnológica a una arista igual de letal: hoy se documentan más de 2.000 agresiones entre estigmatización del poder ejecutivo y legislativo, demandas estratégicas contra la participación pública y la información crítica (*SLAPP*) orientadas a la quiebra técnica y la asfixia financiera por el manejo discrecional de la pauta oficial.

Desentrañar los hilos mediante el cruce forense de contratos, registros societarios, auditorías a cuentas, entre otros mecanismos, no solo son acciones de la resistencia para evitar que la democracia no naufrague en la impunidad, la misma que persiste sobre el sacrificio de los colegas.

El asedio a la prensa “ha adquirido caracter oficial”

El recorrido histórico del periodismo en Colombia demuestra que informar ha sido un pulso permanente contra quienes tienen en sus manos el monopolio de las armas, el presupuesto público o el poder de las instituciones.

De acuerdo con los registros consolidados de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 171 periodistas han sido asesinados en el país por razones asociadas a su oficio. Y como si fuera poco que más de 100 han tenido que salir del país, el índice de impunidad supera el 75%.

Porque la persecución, reconocida, sobre todo del periodismo regional, arrancó, prácticamente en 1924, cuando en Neiva, fue asesinado Reynaldo Matiz Trujillo, director de ‘El Renacimiento’, tras denunciar la responsabilidad de un terrateniente en la denominada "Masacre de los Limpios"; su agresor quedó libre.

Catorce años más tarde, en 1938, el director de La Voz de Caldas en Manizales, Eudoro Galarza Ossa, cayó abatido en su propia oficina por disparos del teniente del Ejército Jesús María Cortés Poveda, luego de publicar denuncias sobre maltratos a la tropa. El militar fue absuelto bajo el argumento de la defensa del honor castrense.

Durante el periodo de La Violencia y la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla (1948-1957), ***el asedio adquirió carácter oficial***. El 6 de septiembre de 1952, turbas incendiaron las instalaciones de El Tiempo y El Espectador en Bogotá ante la pasividad de la Fuerza Pública. Posteriormente, el régimen militar decretó la censura previa y clausuró ambos diarios en 1955 y 1956, obligando a directores como Roberto García-Peña y Gabriel Cano a circular bajo nombres alternos para esquivar la mordaza estatal.

Entre 1983 y 1993, el narcotráfico declaró la guerra abierta contra las salas de redacción. El Cartel de Medellín, bajo el mando de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, ejecutó ***una campaña de terrorismo urbano*** que cobró la vida del director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza, en diciembre de 1986, y destruyó la sede del diario con un camión bomba en septiembre de 1989.

Ese mismo año, otro explosivo atacó la planta de Vanguardia Liberal en Bucaramanga, asesinando a cuatro trabajadores, y en Cali el diario El Caleño sufrió un atentado similar tras el asesinato del subdirector de Occidente, Raúl Echavarría Barrientos, en 1986. La ofensiva incluyó los asesinatos de Jorge Enrique Pulido (1989) y Diana Turbay (1991), así como los secuestros de Francisco Santos y Maruja Pachón.

Simultáneamente, entre 1987 y 2005, la ***alianza entre el paramilitarismo y sectores del Estado*** instaló el exterminio selectivo en las regiones. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandadas por Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y alias 'Jorge 40', ejecutaron crímenes emblemáticos como los del columnista Héctor Abad Gómez (1987), los investigadores Elsa Alvarado y Mario Calderón (1997), y el humorista político Jaime Garzón (1999), crimen en el que la justicia condenó como determinadores a Castaño y al exsubdirector del DAS José Miguel Narváez.

En el año 2000, la periodista Jineth Bedoya Lima fue secuestrada, torturada y violada por integrantes del Bloque Centauros en la puerta de la cárcel ‘La Modelo’ con complicidad estatal, hecho por el cual l***a Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado*** en 2021. En el plano político regional, el subdirector de La Patria, Orlando Sierra Hernández, fue asesinado en 2002 por orden del exdiputado caldense Ferney Tapasco tras denunciar corrupción administrativa.



Por su parte, las guerrillas de las FARC, el ELN y el EPL impusieron ***controles territoriales mediante secuestros, atentados y homicidios de corresponsales.*** Entre los casos documentados figuran el asesinato de Luis Palacio Iragorri en Cali por el EPL (1980), el homicidio de Hernando Rangel Moreno en Magdalena por orden del comandante de las FARC alias 'Martín Caballero' (1999), el carro bomba contra Caracol Radio en Bogotá (2010) y la retención de comunicadores como Guillermo 'La Chiva' Cortés, Salud Hernández-Mora y Diego D'Pablos.

En las últimas dos décadas (2004-2026), la violencia física dio paso a la sofisticación del espionaje estatal y la estigmatización institucional. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el DAS desplegó interceptaciones ilegales y seguimientos contra periodistas críticos como Claudia Julieta Duque, Daniel Coronell, Hollman Morris y Félix de Bedout. Entre 2019 y 2020, unidades de inteligencia del Ejército Nacional elaboraron carpetas secretas con información privada de más de 130 reporteros nacionales y corresponsales extranjeros, entre ellos Yolanda Ruiz, Ignacio Gómez y Gina Morelo.

Más recientemente, entre 2022 y 2026, ***los monitoreos documentan más de 2.000 agresiones contra la prensa***, impulsadas por la estigmatización desde altas esferas del Ejecutivo contra medios y periodistas, el hostigamiento digital, las demandas judiciales de acoso (*SLAPP*) y la persistencia de grupos armados como disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, responsables del asesinato de diez comunicadores en este periodo, incluidos Rafael Moreno en Córdoba (2022) y Mardonio Mejía en Sucre (2024).

Así, tras más de un siglo de historia republicana, la prensa colombiana continúa operando bajo el fuego cruzado de las armas, los despachos judiciales y el poder político.

Medio siglo de agresiones



ABELARDO DE LA ESPRIELLA (2026...) RESTRINCCIÓN RUEDAS DE PRENSA Y ENTREVISTAS A MEDIOS. SUSPENSIÓN DE LA EMISORAS DE PAZ.



GUSTAVO PETRO (2022–2026) SE 2.003 AGRESIONES CONTRA 870 PERIODISTAS. ASESINATOS Y ESTIGMATIZACIÓN DIGITAL.



IVÁN DUQUE (2018–2022) USO PREVENCIÓN Y ACCIÓN, UN PROGRAMA DE TV SIN CONTRAPREGUNTAS, PERFILAMIENTOS MILITARES A PERIODISTAS.



JUAN MANUEL SANTOS 2010–2018) CRÍTICAS DE SECTORES DE OPOSICIÓN POR EL USO DE PAUTA ESTATAL PARA PROMOVER EL ACUERDO DE PAZ.



ÁLVARO URIBE (2002–2010) CHUZADAS ILEGALES DEL DAS CONTRA PERIODISTAS CRÍTICOS. SE DISPARÓ EL EXILIO DE PERIODISTAS.



A pesar de que hubo cuatro presidentes (16 años de los últimos 50) relacionados con el periodismo y los medios de comunicación, Belisario Betancur, Andrés Pastrana, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, la situación de quienes ejercemos el oficio del periodismo no cambió y, por el contrario, se ha agudizado cada vez más.

En los últimos 50 años (1976–2026), la relación entre la Presidencia de Colombia y los medios de comunicación ha transitado por tres etapas: un periodismo tradicional muy ligado a los partidos políticos (años 70), la época más sangrienta por cuenta del narcotráfico y el conflicto armado (años 80 y 90), y la era del el espionaje estatal, la estigmatización y la desintermediación a través de las redes sociales propias (siglo XXI).

Una docena de líderes políticos han marcado ***este medio siglo con políticas hacia la prensa*** que inducen a la censura, riesgos por señalamientos directos y directrices legislativas que limitan la esencia investigativa de cara a la rendición de cuentas que un mandatario (presidente, gobernador, alcalde), funcionarios (nombrados o contratados), congresistas (senadores y representantes), diputados y concejales le deben a los colombianos.

Si bien es cierto históricamente se ha mantenido una relación hegemónica con los grandes medios y ha prevalecido cierta fluidez, los periodistas hemos atravesado barreras desde las mismas redacciones. El contraste es que la cifra de 171 asesinatos por razones del oficio, en las últimas cinco décadas, no escapa a Colombia de ser el país de América Latina donde ejercerlo es lo más peligroso.

Fue precisamente en los 70 con el repunte de la guerrilla urbana, destacán-dose el M-19, y la mafia emergente, que ser periodista en la patria se iba perfilando como un 'milagro'. Se intensificaron la violencia, las amenazas, los atentados y la estigmatización.

Detenciones arbitrarias, perfilamientos, censura y amenazas especialmente para los reporteros que cubrían abusos militares o las acciones del M-19. El famosos 'Estatuto de Seguridad' restringió la cobertura en zonas de orden público y permitió sanciones o cierres temporales por las transmisiones radiales y televisivas de estos hechos.

Pasando los 80 y los primeros indicios de diálogos para la paz asomaron una nueva era con el narcoterrorismo, la toma del Palacio de Justicia y el dolor nacional por el asesinato de Raúl Echavarría Barrientos (subdirector del diario Occidente de Cali), en1986.

Pero, sin llegar a los 90, la peor escalada contra la prensa se vivió con Virgilio Barco. El crimen de Guillermo Cano (El Espectador, 1986), la destrucción con dinamita de la sede (1989), contra Vanguardia Liberal, el asesinato de decenas de colegas, más los forzados al exilio.

Diana Turbay (1991) y Gerardo Bedoya (1997), Jaime Garzón (1999), Guzmán Quintero, El Pilón (1999) víctimas del auge del paramilitarismo y las Farc contra la prensa regional. Al que se sumó el secuestro y tortura de Jineth Bedoya (2000) y el sacrificado Orlando Sierra (2002).

Aunque los asesinatos bajaron con Álvaro Uribe ***se disparó el exilio de periodistas, el espionaje estatal, las amenazas paramilitares y el asesinato de reporteros regionales***. Y con el proceso de paz de Juan Manuel Santos persistieron ataques en zonas de frontera y crimen organizado como sucedió con el equipo de prensa ecuatoriano de El Comercio en 2018.

Las agresiones físicas de la fuerza pública contra reporteros durante el 'Estallido Social' de 2019 y 2021 (más de 300 agresiones documentadas por la FLIP solo en las protestas de 2021). Con Gustavo Petro se registraron 2.003 agresiones contra 870 periodistas, incluyendo 10 asesinatos de comunicadores regionales.

En lo poco que lleva Abelardo De la Espriella, alertas de la FLIP y la AMI por el retiro de pauta oficial a medios críticos y señalamientos contra encuestadoras y periodistas.

Terminado el Frente Nacional, entre 1974 y 1978 Alfonso López Michelsen mantuvo una relación fluida e intelectual con los medios, pero en el paro de 1977 destapó restricciones informativas sobre orden público. El Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay (1978-1982) restringió la cobertura en zonas de orden público y permitió sanciones o cierres temporales a transmisiones radiales y televisivas. Y en 1982-1986, el poeta Belisario Betancur, durante la toma del Palacio de Justicia (1985), ordenó cortar las transmisiones en vivo de radio y TV para emitir un partido de fútbol.



ANDRÉS PASTRANA (1998–2002) CRÍTICAS POR EL MANEJO INFORMATIVO DE LA ZONA DE DISTENSIÓN DEL CAGUÁN. SEGUNDO PICO MÁS ALTO DE ASESINATOS (MÁS DE 30 PERIODISTAS).



ERNESTO SAMPER (1994–1998) POLARIZACIÓN EXTREMA POR EL PROCESO 8.000. ACUSÓ A MEDIOS CRÍTICOS DE CONSPIRAR PARA DERROCARLO Y USÓ LA PAUTA OFICIAL COMO HERRAMIENTA DE PRESIÓN.



CÉSAR GAVIRIA (1990–1994)DECRETOS DE CONMOCIÓN INTERIOR QUE PROHIBÍAN DIFUNDIR ENTREVISTAS O COMUNICADOS DE GRUPOS ARMADOS Y NARCOS..



VIRGILIO BARCO (1986-1990) INCAPACIDAD DEL ESTADO PARA FRENAR LA OFENSIVA TERRORISTA CONTRA LAS SALAS DE REDACCIÓN DE LOS MEDIOS.

2 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL PARA PONER FIN A LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS

La ‘injusticia’ sigue propiciando la violencia contra la prensa en Colombia

En 2024, la FLIP analizó los 17 homicidios de periodistas ocurridos entre 2014 y ese año. Para ese momento, ninguno de los casos estaba en total esclarecimiento: el 94.1% estaban en etapa de investigación y solo el 35.2% presentaba avances parciales, pues solo tenían alguna condena hacia los autores materiales.

Además, se afirmó que el estado de los avances en la investigación “revela que la impunidad se ha convertido en la norma”.

Dos años después, el panorama no ha cambiado. Aunque se han registrado avances judiciales, las capturas y condenas contra algunos participantes de la cadena delictiva no garantizan una justicia completa. Persisten preguntas sobre quiénes planearon, financiaron u ordenaron los asesinatos y qué información buscaban silenciar. Resolverlas exige investigar las publicaciones, amenazas y presiones que precedieron a los ataques, y seguir las líneas que permitan establecer todas las responsabilidades.

Actualmente, la FLIP acompaña y representa 12 casos de homicidios de periodistas que han estado marcados por diversos obstáculos en la justicia: aplazamientos reiterados de audiencias, periodos prolongados de inactividad, fallas en la recolección de pruebas y falta de investigaciones dirigidas a identificar a los máximos responsables.

Este contexto de impunidad y dilaciones resulta aún más preocupante ante la violencia que, este año, continuó golpeando de manera diferencial al periodismo y a las iniciativas comunicativas en las regiones.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advierte que la respuesta institucional aún es insuficiente para garantizar justicia a las víctimas y sus familias. Las demoras en los procesos, las deficiencias en la investigación, y la falta de esclarecimiento sobre quienes ordenaron los asesinatos siguen obstaculizando el acceso a la justicia para periodistas y sus familias.

Ante la existencia de una violación de los derechos humanos, el sistema judicial penal diseñado para llevar a juicio y castigar a los responsables se encuentra ausente o no entra en funcionamiento. Cuando esto ocurre la noción misma de justicia, sustento esencial de la convivencia democrática, se ve profundamente distorsionada. Los responsables de tales violaciones, al constatar que pueden violar la ley impunemente, encuentran aliento para seguir cometiendo esos crímenes.

En tan solo los últimos seis meses, la Fundación denunció los asesinatos de Mateo Pérez Rueda, en mayo; de Cristian Herrera, en junio; de Jader Durango, en julio; y de Julián Hincapié, en octubre.
El caso de Jader aún se encuentra en documentación para confirmar si su homicidio tuvo relación con su trabajo periodístico. Actualmente, la FLIP representa a los familiares de Cristian y Mateo, casos frente a los cuales la Fiscalía todavía puede evitar que se repitan las fallas que han dejado otros asesinatos aún sin esclarecer.

La pérdida irreparable de estas voces críticas refleja la vulnerabilidad de quienes investigan y denuncian asuntos de interés público en lugares como Antioquia, Norte de Santander y Córdoba, donde confluyen intereses políticos, económicos y criminales. Además, cuando se agrede, intimida, amenaza o asesina a un periodista las comunidades pierden información y se debilitan las posibilidades de denunciar abusos, y vigilar y exigir responsabilidades a quienes ejercen el poder.

La persistencia de estos hechos obliga a cuestionar la capacidad del Estado para investigar y prevenir la violencia contra la prensa.

Los altos índices de violencia y de impunidad demuestran que reaccionar luego de un asesinato no es suficiente. Es indispensable identificar oportunamente las amenazas y a quienes las emiten, ajustar esquemas de protección, trabajar de manera articulada y garantizar medidas que respondan de manera oportuna y proporcional a los riesgos del ejercicio periodístico.



LA FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA (FLIP) HACE UN LLAMADO A:

LA FISCALÍA investigar los crímenes contra periodistas con enfoque de censura. examinar sus publicaciones, las amenazas y presiones que enfrentaban y los intereses afectados por sus denuncias, para esclarecer el móvil e identificar a quienes ordenaron, financiaron o facilitaron los ataques.

A LOS JUECES incorporar en sus decisiones el contexto del ejercicio periodístico y valorar las pruebas sobre la relación entre los crímenes y la labor informativa. Asimismo, deben garantizar la participación efectiva de las víctimas y corregir las causas de aplazamiento bajo su responsabilidad, con respeto por el debido proceso.

A LA UNP uNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN para que revise qué tan eficaces son las medidas en los casos de periodistas asesinados que contaban con protección, para identificar las fallas y adoptar correctivos. Las evaluaciones de riesgo también deben considerar las publicaciones, las amenazas y las condiciones del territorio, y las medidas deben ajustarse oportunamente cuando el riesgo cambie.

La protección de familiares y sobrevivientes debe responder a los riesgos que persisten después del crimen y a su participación en la búsqueda de justicia.

La independencia y no censura es constitucional

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ASOMEDIOS: La independencia implica que los medios de comunicación y los periodistas ejerzan el derecho a la información sin acciones que limiten directa o indirectamente la difusión de la información de forma libre, de conformidad con los criterios periodísticos legalmente establecidos, como la veracidad, la imparcialidad y la responsabilidad social.

Es importante que los medios de comunicación y periodistas sean independientes para que cumplan su función de entregar información libremente y que los ciudadanos puedan formarse una opinión a partir de los hechos por ellos reportados. Si la información se entrega con vicios, de forma indenciosa, a medias o sin transparencia, los derechos de la ciudadanía se verían afectados.

Se ha entendido que esta independencia no impide que haya una intervención cuando se trate de asuntos relacionados con bienes o servicios que sean considerados públicos y sean sujetos a gestión y control del Estado, pero siempre dentro de los límites establecidos por el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia que de forma categórica establece que “no habrá censura”.

AKADEMIE.DW.COM

Se estima que la desinformación cuesta a las sociedades entre 350.000 y 500.000 millones de dólares anuales. El periodismo independiente es una de las defensas más eficaces y basadas en evidencia contra ella.

La libertad de prensa también reduce drásticamente la probabilidad de conflictos, represión y violaciones de los derechos humanos. Un estudio realizado en 152 países asoció un mayor acceso a medios de comunicación libres con una disminución de los abusos contra los derechos humanos.

Además, se ha demostrado que la cobertura mediática aumenta drásticamente la magnitud y la rapidez de la respuesta humanitaria internacional y salva vidas. Un estudio de más de 2300 desastres reveló que una sola noticia publicada en el New York Times generó medio millón de dólares adicionales en ayuda oficial.





RUPERTICO

Todos hablamos, pero no decimos lo mismo

A veces siento que el ecosistema digital de hoy es como una fiesta ruidosa donde todos gritamos para que nos miren, pero pocos recordamos a qué vinimos.

En una misma sala, pero virtual, convivimos un poco de seres de diferentes etnias, idiomas, edades con formación rigurosa en la data, en el dato, en la comunicación, en la redacción, en el audiovisual, el diseño, la estrategia y, hasta, quienes descubrieron que un teléfono celular, un aro de luz y el carisma son suficientes para conectar multitudes.

La situación no es que compartamos el escenario; el problema es que la audiencia, y en una medida porcentual nosotros, empezamos a confundir libretos.

Si, en estos momentos, en estas escenas pusiéramos frente a una mismo ventanal o espejo al periodista, al comunicador, al creador de contenido y al influencer, ¿qué reflejaría?. Se me ocurre, algo de encanto, pero también me despierta inquietud.

A simple vista todos hacemos lo mismo: contar historias y buscar, al menos, los tres segundos de atención en el móvil de alguien que pase por allí. Sin embargo, detrás de cada detrás, hay algunos pactos éticos opuestos que desdibujan lo contado a una velocidad loca y peligrosa.

El periodismo tiene una misión incómoda y debe fiscalizar los poderes, sobre todo públicos, ***para contar lo que alguien más no quiere que se sepa.*** Ahí, entran el método, la investigación, la verificación, la confrontación y el costo a pagar si llega a equivocarse.

Frente a su conocimiento está la comunicación tan legítima como distinta y que no es precisamente la imparcialidad su propósito sino construir reputación, articular mensajes y proteger intereses.

Luego llegaron los creadores de contenido. Se les reconoce que dieron lección de narrativa. Demuestran que se puede hablar de historia, ciencia o finanzas con una creatividad que en algunas redacciones se había olvidado.

Y apareció el influencer, ese fenómeno donde el mensaje y el mensajero son la misma cosa. Allí la investigación o la edición no son el fuerte. Es la cercanía y el privilegio de asomarse por la ventana de una vida ajena.

El cortocircuito, entonces, ocurre cuando los roles se traspasan o disfrazan unos de otros y sin avisar. Me preocupa ver a periodistas renunciando a la profundidad por clics con fórmulas de entretenimiento, pero me preocupa más ver a influencers pontificando sobre crisis tanto públicas como de salud o economía, escondidos detrás de solo un “es solo mi opinión personal".

Con millones de sentidos (ojos y oídos) encima, improvisar no es un derecho inofensivo es una irresponsabilidad social.

Y no estoy acobijado con la nostalgia para defender un estilo o un monopolio para la divulgación. El mundo dio la vuelta y los nuevos formatos están para quedarse y también se van adaptando. Es preciso ver creadores más rigurosos y periodistas navegando sobre el lenguaje digital. Diría que la urgencia es la honestidad que se entrega a quien está del otro lado de la pantalla.

Ya hemos visto como la democracia y la conversación pública no se destruyen por la influencia o proliferación de marcas, en cambio si se deteriora la conexión porque ya no sabe disntinguir si lo que se ofreció es una investigación contrastada, una campaña pagada, una pieza de entretenimiento o el capricho espontáneo de alguien.

Estamos en el momento de diferenciar que no es el que hable más fuerte sino el que esté dispuesto a responder por el contenido que ha creado para influenciar a los demás.

MIENTRAS LOS DAMNIFICADOS SIGUEN PASANDO PENA, LAS DECISIONES ESTATALES DAN PENA

¿En el fondo, el milagro se dará?

Luis Felipe Henao Cardona nacido en Medellín de la línea de Cambio Radical, abogado con especialización en derecho de Empresa y Penal llega a acallar el desacierto que el presidente Abelardo De la Espriella ha tenido con el manejo de la reconstrucción para las víctimas del terremoto del 10 de agosto.

Pasados tres meses, el 'Fondo Milagro' está tomando camino a ser fiel a su nombre porque a más de 90 días, no hay claridad en su funcionamiento. Y de repeso se descubrió por parte del senador Duvalier Sánchez que los salarios ***del equipo humano que lo manejaría lo desfondaría*** a razón de $765,6 millones al mes, sin contar primas ni prestaciones sociales.

El saliente gerente Jaime Andrés Uribe devengaba $39.441.454 al mes —más de ocho millones por encima del salario de un ministro de despacho—, mientras su secretario privado y su director jurídico y de contratación tenían asignados honorarios de $36.000.000 cada uno. A esta estructura salarial se sumaba la comisión pagada a Fiducoldex por administrar el patrimonio autónomo, equivalente a 142 salarios mínimos mensuales (cerca de $248,6 millones antes de IVA), elevando el costo de funcionamiento por encima de los mil millones de pesos cada treinta días.



FOTOS: REDES SOCIALES

LUIS FELIPE HENAO CARDONA

Mientras estos recursos se girarían - *el presidente ordenó no pagar ni un solo peso* - 26 personas asegurarían su bienestar contrario a los más de 260 mil damnificados que esperan se inviertan los $624.000 millones disponibles para intervenciones urgentes.

La llegada de Henao plantea de inmediato el control fiscal y desmontar la burocracia. ***Desde el 2006 ha estado vinculado al ministerio de Vivienda en varias etapas y cargos. También ha sido miembro de las juntas directivas de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Ecopetrol y AvVillas. Su esposa, Luz Stella Murgas es presidenta de la Andi.***

"Nadie tiene el puesto asegurado y todos los funcionarios están en permanente evaluación. Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato", señaló el presidente de la República.



JAIME ANDRÉS URIBE

Toda información en poder del Estado es pública, y es la entidad la que debe demostrar legalmente por qué no puede entregarla. Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia)

Información reservada (Art. 19): Aquella que compromete la defensa y seguridad nacional, las relaciones internacionales, la estabilidad macroeconómica o investigaciones penales en curso.

Información clasificada (Art. 18): Aquella que afecta derechos fundamentales de terceros (datos médicos, historia laboral privada, secretos industriales o comerciales). Nota: Si un contrato tiene datos personales (como la cédula o dirección de un ciudadano), la entidad no puede negar el documento completo; debe entregar una versión pública tachando únicamente los datos sensibles.

El Valle, Cali y Buenaventura muestran avances en gestión por la reconstrucción



ALEJANDRO ÉDER, ALCALDE DE CALI: Luego de tres meses, ya hemos demolido 20 de los 85 edificios que serán derribados y tenemos cinco frentes de trabajo activos. Pero en medio de la reconstrucción, también tenemos identificadas 700 familias que perdieron definitivamente sus viviendas y estamos estructurando un programa que contempla un apoyo de $50 millones por familia para facilitar la compra de un hogar nuevo. Ya desembolsamos dos de los tres pagos de ayuda económica a los 21.000 damni-ficados que califican para recibirla. Este proceso tomará tiempo, pero no vamos a detenernos en lo que nos queda. Cali ha de-mostrado su solidaridad y capacidad de unirse en los momentos difíciles. ¡No permitamos que nada ni nadie nos divida!

Los recursos permitirán avanzar en tres obras fundamentales: En el HUV se reconstruirá una torre que permitirá recuperar 148 camas de alta complejidad, 78 de ellas en UCI, y reactivar seis servicios especializados.

la Institución Educativa 'Juan José Rondón' se volverá a construir con aulas modernas con aislamiento termo-acústico, iluminación LED, restaurante escolar y cerramiento perimetral seguro, beneficiando a 813 estudiantes.



LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO con $200 mil millones se puso la camiseta para apoyar la atención de la emer-gencia y la reconstrucción, que además del Valle llegará a Risaralda y Chocó. En el Valle, la nueva torre de hospita-lización y cuidados intensivos en el Hospital Universitario del Valle, en Cali; espacios para atención primaria, labo-ratorio y consulta especializada en el Hospital San Antonio de Roldanillo, y la reconstrucción de la Institución Educativa 'Juan José Rondón' de Buenaventura, serán posibles con la donación de $87.000 millones que hizo oficial la Fundación Sarmiento Angulo, destinados a la reconstrucción de infraestructura social crítica tras el sismo del pasado 10 de agosto en el Valle del Cauca. Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento anunciaron la donación a la gobernadora Dilian Francisca Toro y la alcladesa Ligia del Cramen Córdoba.

2,6 millones de colombianos viven con diabetes y aún no lo saben

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre, se hace un llamado urgente frente a esta enfermedad silenciosa que afecta a millones de personas en todo el mundo y que, en Colombia, representa un desafío creciente en materia de salud pública.

De acuerdo con la Federación Internacional de la Diabetes (FID), el 11,1% de la población adulta entre 20 y 79 años —uno de cada nueve adultos, cerca de 589 millones de personas— vive con diabetes, una cifra que podría llegar a 853 millones en 2050.

Solo en 2024, la enfermedad causó 3,4 millones de muertes. Más del 90% de los casos corresponden a diabetes tipo 2, asociada con factores como el sedentarismo, la obesidad, la mala alimentación y el envejecimiento poblacional.

La organización también advierte un aumento de casos de diabetes tipo 2 en jóvenes y adolescentes, impulsado por el sobrepeso y el sedentarismo, un fenómeno que preocupa a la comunidad médica por sus efectos a largo plazo sobre la salud glo-bal. En Colombia, según la FID, el 8,4% de los adultos mayores de 20 años presenta diabetes, lo que equivale aproximadamente 3 millones de personas.

Por su parte, la Cuenta de Alto Costo - organismo técnico que recopila y analiza datos sobre enfermedades de alto costo para gestionar el riesgo en salud y mejorar la atención - reportó 2.597.719 casos de diabetes mellitus informados en el país con corte al 31 de agosto de 2025 (cifra preliminar), lo que evidencia la magnitud de esta enfermedad en la población colombiana.

La diabetes suele desarrollarse sin síntomas notorios en sus primeras etapas, y cuando se detecta, muchas veces ya ha causado daños renales, pérdida de visión, enfermedad cardio vascular o amputacio-





DESDE 1980 EL NÚMERO DE PERSONAS CON DIABETES EN EL MUNDO CASI SE HA CUADRUPLICADO. SE ESTIMA QUE 425 MILLONES DE ADULTOS LA PADECÍAN EN 2017, FRENTE A LOS 108 MILLONES DE 1980. EN AMÉRICA LATINA, ES LA CUARTA CAUSA DE MUERTE: NACIONES UNIDAS

nes. *El aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados, el sedentarismo y el sobrepeso han impulsado la aparición temprana de la diabetes tipo 2*. No obstante, los expertos coinciden en que esta es una enfermedad prevenible y controlable. Una alimentación balanceada, la actividad física regular, el control del peso y los chequeos médicos periódicos pueden retrasar su aparición y reducir significativamente las complicaciones.

Para prevenir y detectar a tiempo la diabetes, emi Falck invita a reconocer los factores de riesgo, como: antecedentes familiares, sobrepeso, hipertensión o niveles elevados de glucosa. También recalca la importancia de realizar controles médicos periódicos, incluso cuando no haya síntomas, para favorecer la detección temprana y una intervención oportuna. Adoptar hábitos saludables —como mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física regular y asegurar un descanso adecuado— contribuye de manera significativa a reducir el riesgo.

ADRES giró por UPC $8,85 billones en octubre

La ADRES, durante octubre, giró $8,85 billones por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC), de los cuales $4,42 billones corresponden al régimen subsidiado y $4,43 billones al régimen contributivo.

"Nuestro compromiso también se refleja en los recursos destinados a otras necesidades del sistema. En este mes, pagó más de $180 mil millones por incapacidades de enfermedad general y más de $49 mil millones para actividades de promoción y prevención de enfermedades (PyP)".

Asimismo, giró más de $152 mil millones por 13.526 licencias de maternidad, 8.371 licencias de paternidad y 67 fallos de acción de tutela reportados por las EPS.

Giro directo a prestadores

En el giro directo de los recursos a instituciones y proveedores del sistema de salud, en este periodo, distribuyó $7,88 billones a 3.880 clínicas, hospitales y proveedores de todo el país.

De estos recursos, $3,88 billones correspondieron al régimen contributivo, equivalentes al 87,56% de la UPC reconocida. Mientras que $4 billones se destinaron al régimen subsidiado, con una participación del 90,40%.

Entre enero y octubre de este año, la ADRES transfirió $87,67 billones para el aseguramiento de los afiliados al sistema de salud: $44,10billones para el régimen subsidiado y $43,56 billones para el contributivo.

Adicionalmente, reconoció más de $1,19 billones para licencias de maternidad, paternidad y fallos de tutela.



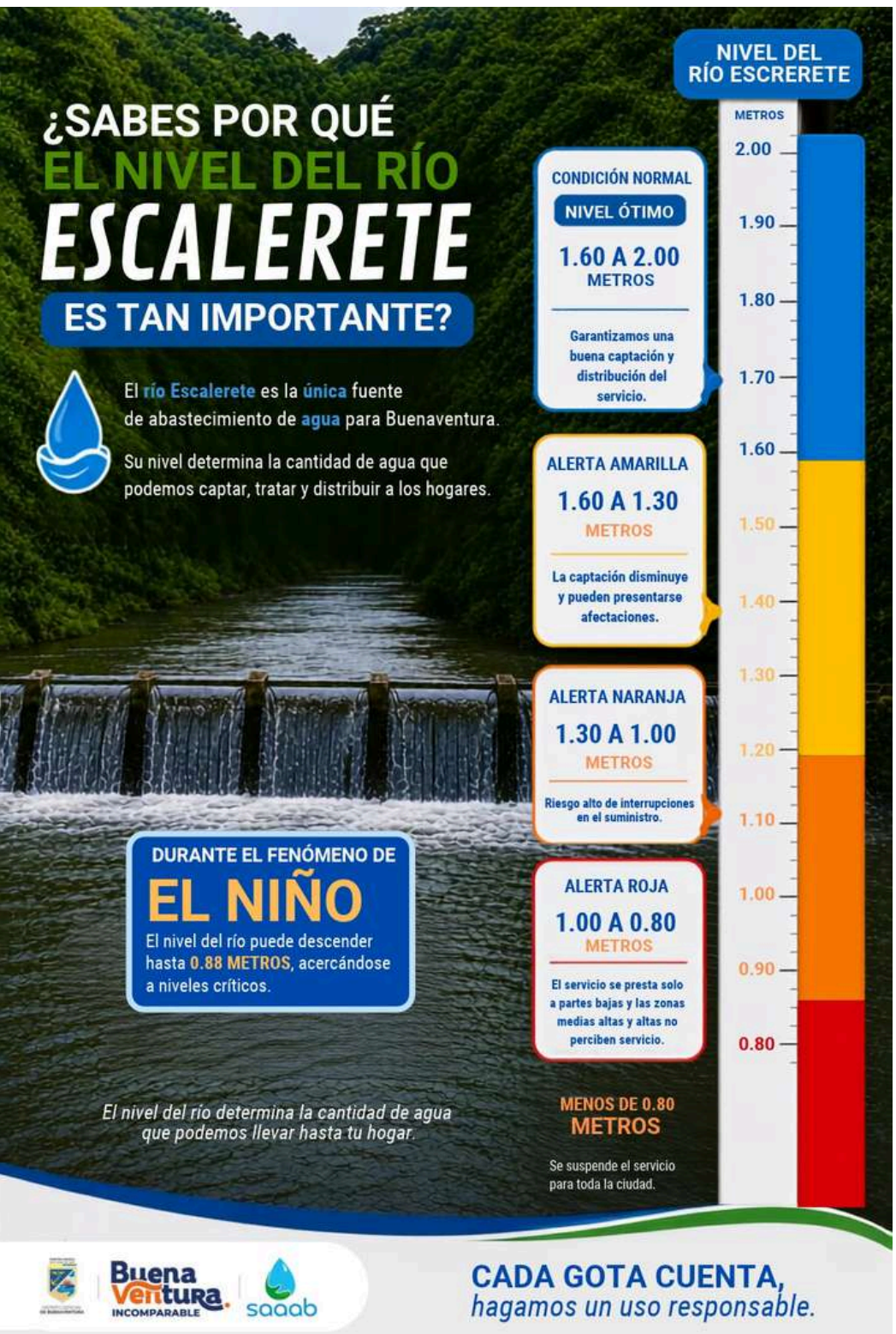






Sarah como Whitney Houston alivia a Buenaventura


REDES SOCIALES







El Valle lo Reconstruimos Juntos

solidaridad que levanta hogares, recupera sueños y devuelve esperanza



FOTOS: GOBERNACIÓN DEL VALLE

La solidaridad de los vallecaucanos se ha convertido en una fuerza capaz de transformar la tragedia en esperanza. Tras el terremoto del pasado 10 de agosto, empresarios, gremios, organizaciones, instituciones y ciudadanos han unido esfuerzos para ayudar a levantar los hogares, recuperar los sueños y devolver las oportunidades a miles de familias damnificadas. Una movilización que, bajo la campaña 'El Valle lo Reconstruimos Juntos', ya se traduce en acciones concretas para poner en pie al departamento.

La primera fase contempla 11.782 soluciones habitacionales, entre 9.369 reconstrucciones asistidas y 2.413 viviendas nuevas. Un trabajo liderado por la gobernadora Dilian Francisca Toro, que prioriza a las familias más vulnerables y promueve un modelo de autoconstrucción asistida, con acompañamiento técnico y participación comunitaria.

Buenaventura y Roldanillo, los municipios más afectados, hacen parte de la fase de reconstrucción temprana. Un arranque que para Roldanillo significa 903 mejoramientos y 79 viviendas nuevas, mientras para Buenaventura, 1.260 mejoramientos y 200 viviendas. En San Pedro la reconstrucción beneficiará inicialmente a 126 familias.



Para Elizabeth Pineda, damnificada en Roldanillo, recibir apoyo del Gobierno departamental, significa volver a empezar. "Mi casa quedó prácticamente inhabitable, perdí la mayoría de cosas, y me siento muy feliz y alegre", aseguró.

Una esperanza que comparte Tomasa Valencia en Buenaventura, quien perdió su hogar durante el terremoto. "Mi vivienda se cayó toda, todo lo perdí, vivíamos dos niños y dos adultos. Muchas gracias", manifestó emocionada.

... El Valle lo Reconstruimos Juntos

La reconstrucción también busca recuperar el sustento de las familias. En un trabajo conjunto entre la Gobernación y el Gobierno nacional, se contemplan 1.800 créditos condonables de capital semilla, de hasta $5 millones, para impulsar los negocios afectados, mientras en el departamento con Caravanas Solidarias se promueve el turismo y la reactivación económica.

Sectores solidarios con el HUV

Desde el sector gastronómico se destina a la recuperación del Hospital Universitario del Valle, el 20% del valor de las limonadas vinculadas a la campaña, mientras marcas de moda contribuyen con ventas y donaciones.

"La gente quiere el HUV, porque le sirve no solamente al Valle, sino al suroccidente del país", destacó la gobernadora Dilian Francisca Toro.

La transparencia acompaña esta apuesta colectiva. A través del portal oficial 'El Valle lo Reconstruimos Juntos', donde los ciudadanos pueden consultar las cifras de afectación, el destino de las ayudas humanitarias y las necesidades de donación.



FOTOS: GOBERNACIÓN DEL VALLE

Con cerca de $1 billón proyectado entre la Gobernación y el sector privado, el departamento enfrenta el desafío de recuperar viviendas, instituciones y economías locales.

Porque reconstruir el Valle no es únicamente levantar paredes: es devolver hogares, oportunidades y esperanza a quienes hoy lo necesitan. Todos aún pueden ser parte de la transformación, llevando donaciones a la carrera 1#26-85, antiguas Licoreras del Valle, ubicadas en Cali, porque ¡El Valle lo reconstruimos juntos!





Del río a la nube: jóvenes del Pacífico colombiano transforman sus territorios entre saberes ancestrales e innovación digital

Hablar de Timbiquí, en el departamento del Cauca, es hablar de manglares, selva y ríos caudalosos que bajan desde la montaña para encontrarse con el mar. Es una cuna de cantaoras y artistas que han llevado la música del Pacífico a escenarios internacionales, pero también un municipio de difícil acceso al que se llega tras tres o cuatro horas en lancha desde Buenaventura o en un vuelo de 45 minutos.



FOTOS:RODRIGO VICTORIA BOTERO

En este territorio de cerca de 28.000 habitantes, donde los cortes de energía eléctrica pueden extenderse hasta por quince días al mes y muchos niños deben navegar en lancha desde sus veredas para poder estudiar, las juventudes enfrentan amenazas constantes como la deserción escolar, el embarazo a temprana edad y el asedio de los grupos armados.

Frente a esa realidad nació Saberes punto S, una iniciativa comunitaria liderada por jóvenes locales como Cindy Carabalí que busca blindar a la niñez y juventud creando entornos seguros a través de tres pilares: Educación, Cultura y Deporte y recreación.

“Hacemos maromas con lo que podemos cuando se va la energía y se cae la señal», relatan sus integrantes. Pese a las limitaciones de infraestructura, logramos impactar hoy a cerca de 500 niños y niñas del casco urbano y las zonas rurales de Timbiquí, demostrando que el arraigo cultural es el primer escudo de protección social”.

Tecnología con propósito para el primer empleo

De la alianza entre tres startups —Symmetry Enterprise, Amolados y Change Lab— nació Primer Salto, una plataforma diseñada para conectar el talento joven con las empresas bajo un esquema de valor compartido.

“Existen millones de jóvenes y mujeres que, incluso teniendo un título universitario, no consiguen su primera experiencia laboral», explica Sofía León, estudiante de 20 años de la Universidad del Valle y co-creadora de la iniciativa. La propuesta funciona mediante una ruta de tres pasos:

Descubrimiento con IA: Agentes de inteligencia artificial aplican la metodología japonesa Ikigai para ayudar al joven a identificar su propósito y sus fortalezas.

Enfoque en habilidades blandas: En lugar de exigir experiencia previa o diplomas como filtro excluyente, la plataforma evalúa capacidades como liderazgo, comunicación, resiliencia y proactividad para conectar al candidato con empresas donde pueda agregar valor real.

Entrenamiento previo: Los jóvenes reciben preparación personalizada antes de sus entrevistas para potenciar sus perfiles.

Actualmente en fase de prototipo (mock-up), el equipo busca articularse con gremios empresariales y universidades para que sean estas instituciones quienes financien el modelo y garanticen el acceso gratuito a los jóvenes.

Cerrar la brecha digital

Estas iniciativas locales y tecnológicas hacen parte de un ecosistema más amplio que busca transformar las condiciones estructurales de la región. Según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la pobreza digital en Colombia alcanza el 52% en la población afrodescendiente y el 70% en la población indígena, una desigualdad que limita el acceso a la educación y al empleo digno.

Para revertir este panorama, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en alianza con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con el respaldo de la Unión Europea, impulsa la ventana de ‘Conectividad Significativa’, en el marco de la Facility de Transformación Digital e Inclusiva.

“La conectividad significativa va más allá de tener internet; busca fortalecer las capacidades de adolescentes y jóvenes con herramientas digitales que se traduzcan en medios de vida, empleabilidad y prevención de violencias basadas en género en el entorno digital», señala Martha Lucía Rubio Mendoza, representante auxiliar del UNFPA en Colombia.

A través de este programa se seleccionaron 30 emprendimientos juveniles (startups) —15 en el litoral Pacífico y 15 en el Caribe colombiano—, cada uno respaldado con un capital semilla de entre 20 y 25 millones de pesos para madurar sus modelos de negocio e impacto social. Con una red que ya suma cerca de 70 aliados entre entidades públicas, sector privado y academia, la apuesta continuará expandiéndose hacia 2027.



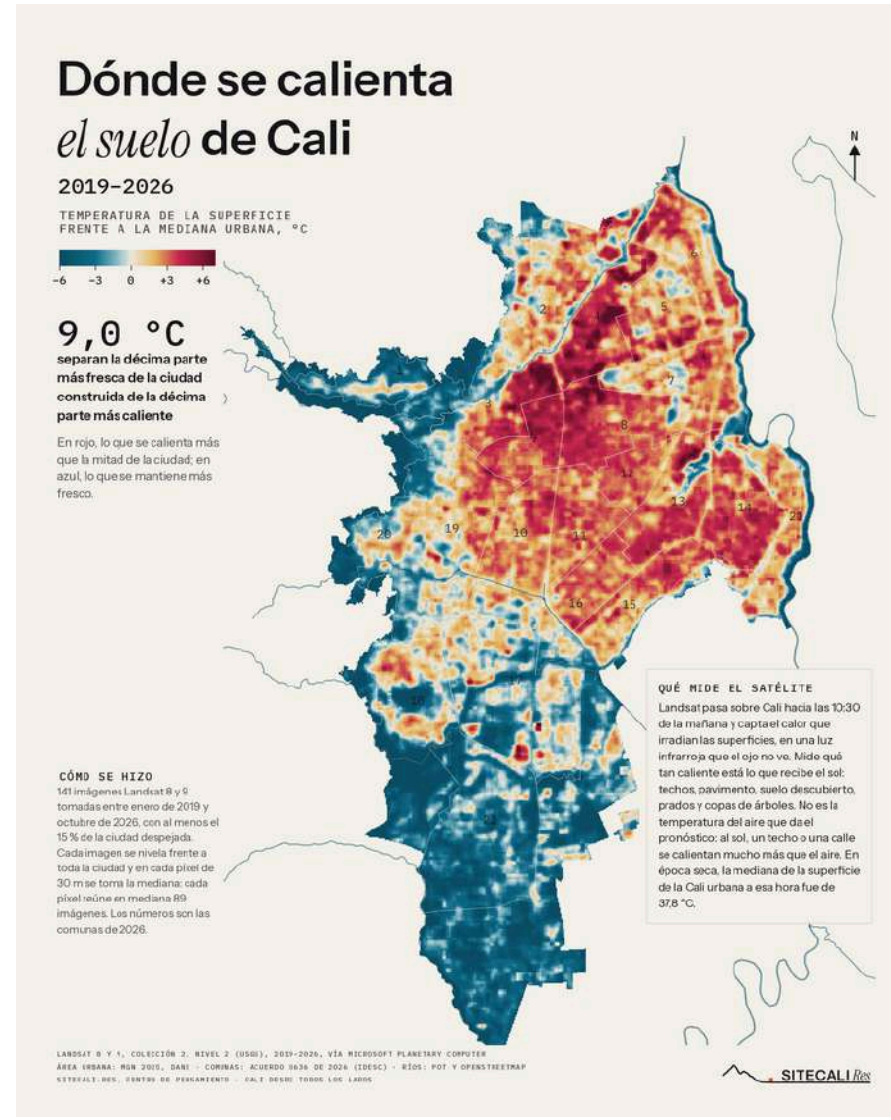
SOFÍA LEÓN, ESTUDIANTE DE 20 AÑOS

En el litoral Pacífico colombiano, el futuro se construye navegando entre dos mundos: la defensa de las raíces culturales en territorios históricamente desconectados y el salto hacia la innovación tecnológica. A través de proyectos comunitarios y alianzas de cooperación internacional, una nueva generación de jóvenes demuestra que cerrar la brecha digital no solo significa llevar internet a las regiones, sino convertir la tecnología en una herramienta de protección, identidad y empleo.

ILs juventudes del Pacífico están demostrando que no son simples beneficiarias de asistencia, sino protagonistas de las soluciones que Colombia necesita.

¡Ay, qué calor!

¿Dónde se calienta más el suelo de Cali? Lo medimos con 141 imágenes del satélite Landsat, de 2019 a 2026. Entre la décima parte más fresca de la ciudad construida y la más caliente hay 9 °C. No es el aire: es el calor de los techos, las calles y el suelo a media mañana.

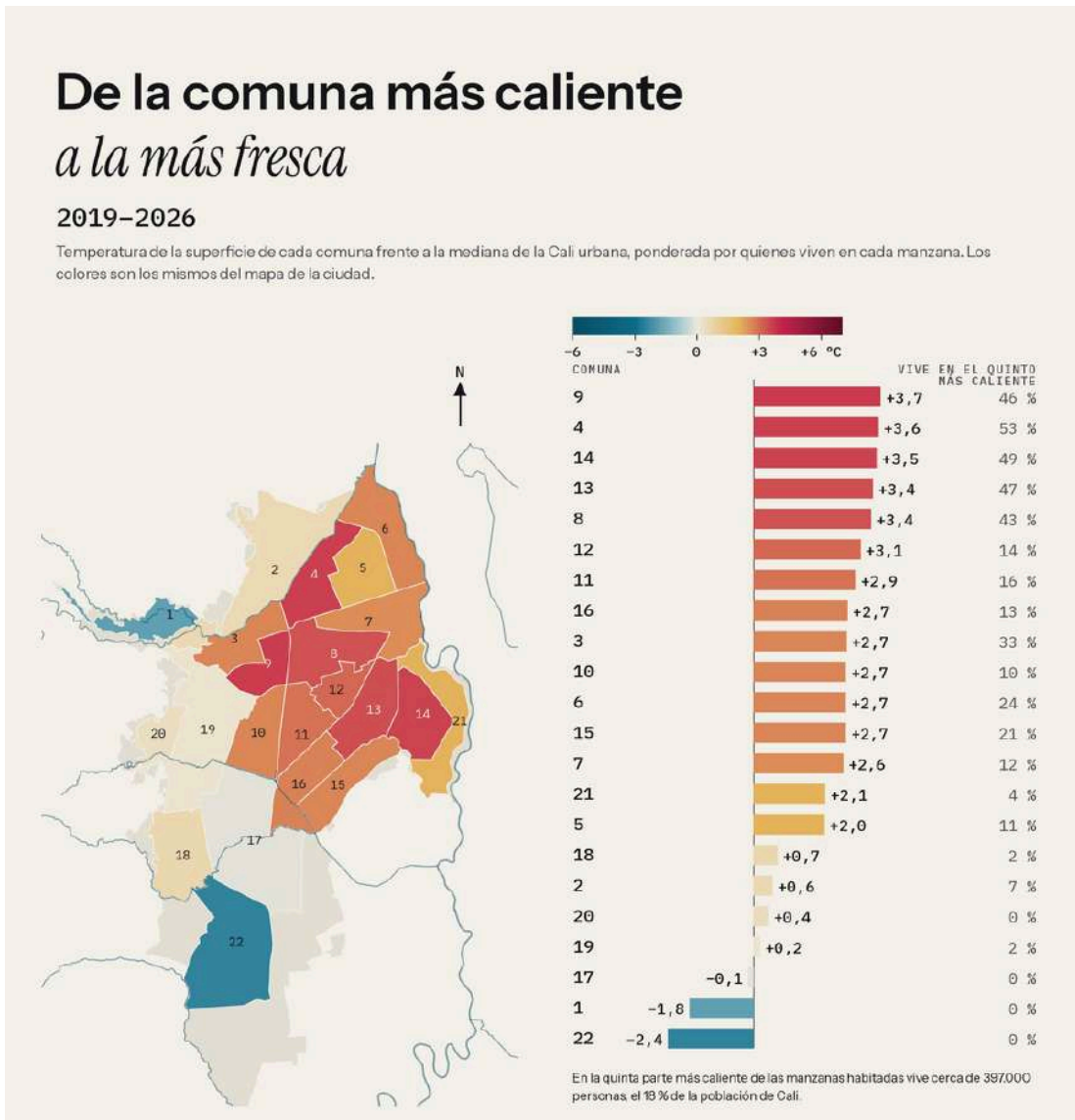


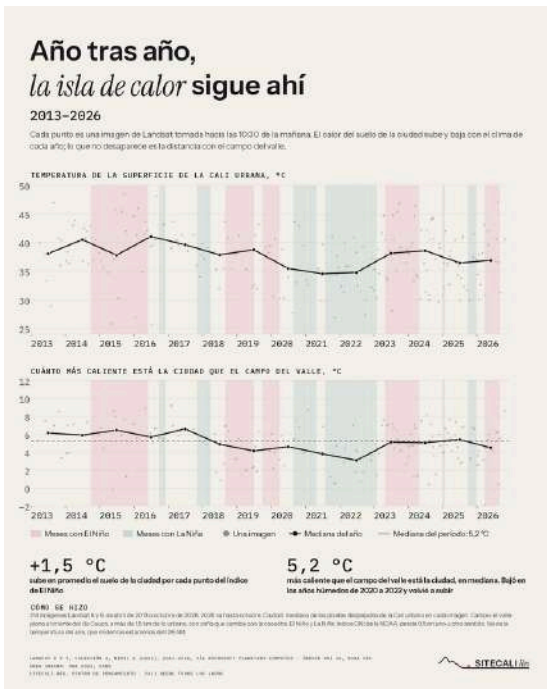
INFOGRAFÍA:JUAN MANUEL TORRES



En X: **@JUANMATOER** sociólogo | Espacialista | Ex Subsecretario de Derechos Humanos y Construcción de Paz en @AlcaldiaDeCali Ex@parescolombia Pacífico. OP. Actualmente: Sitecali Res.

"La defensa de los Derechos Humanos y la Construcción de Paz es el camino que he recorrido como pueblerino, estudiante, activista, investigador, analista, funcionario público y en lo que siga".





¿Cambia con el tiempo?
Sí, donde se construye.
En el suelo de expansión del sur, las hectáreas donde los edificios ganaron una quinta parte del suelo entre 2016 y 2023 se calentaron 2,4 °C frente al resto de la ciudad.
Donde casi no se construyó, casi nada cambió.

